

sociedad



Celebración de la misa en el vestíbulo de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense. / LUIS SEVILLANO

La Complutense se plantea cobrar alquiler a la Iglesia por sus capillas

El campus negocia con el arzobispado el futuro de sus ocho oratorios

PILAR ÁLVAREZ
Madrid

La Universidad Complutense de Madrid estudia cobrar alquiler a la Iglesia por las capillas situadas en el campus. No es una decisión administrativa más. Esta institución, tan grande como una ciudad, tiene ocho capillas integradas en sus instalaciones cuya existencia salta a los titulares de forma periódica. Estos días es por el traslado del oratorio de la Facultad de Geografía e Historia. Distintas organizaciones católicas han recogido miles de firmas, mientras desde el lunes hay misa diaria en el vestíbulo. El arzobispado rechaza el cambio de ubicación argumentando que el espacio alternativo propuesto, un au-

la más pequeña y sin ventanas, es "insuficiente e inadecuado".

Ante este desencuentro, el rector de la universidad, José Carrillo, abre una nueva vía. Si las capillas se quedan en las instalaciones, que paguen alquiler "por ocupar terrenos de la Complutense". Así lo manifestó ayer a EL PAÍS, tras explicar que "no avanza" la negociación abierta para modificar el acuerdo que amparaba los espacios de culto en la universidad, ratificado en 1993 entre el arzobispado y el entonces rector, Gustavo Villapalos.

La Complutense es la universidad pública que más capillas tiene de España junto con la Politécnica de Madrid —ocho cada una—. Entre cuatro universidades madrileñas suman una vein-

tena de oratorios, el doble que en el resto de España.

A finales de 2013, la Complutense denunció el convenio (su periodicidad es renovable cada 10 años) y propuso que estos oratorios se convirtieran en salas ecuménicas abiertas a otros cultos. Esta opción no convence a la Iglesia, que pide centros distintos para distintas religiones "en función de cantidad de fieles que lo demanden", explica el padre Feliciano, delegado de la Pastoral Universitaria.

¿Qué cantidad deberían pagar de alquiler? Los presupuestos de 2014 del campus recogen tarifas que oscilan entre 160 y más de 5.000 euros en función de los espacios y de la duración de los actos previstos, que van de

media jornada a jornada completa. Carrillo señala que habría que establecer unas tarifas concretas en el caso de las capillas. Añade que semanas atrás albergaron un acto de Podemos, el partido que encabeza Pablo Iglesias, por el que la formación política pagó un alquiler. "Si no lo hubieran hecho, sería financiación irregular de partidos, ¿no podría considerarse esto financiación irregular de una institución religiosa?", plantea.

El delegado de la Pastoral Universitaria no lo cree equiparable: "No sería justo que hubiera que pagar. Hablamos de universitarios católicos matriculados. Es como si quisieran cobrar a las asociaciones de estudiantes". Según sus estimaciones, la asisten-

cia a las capillas oscila entre una media de 20 personas que van a diario a la misa de Geografía —el decanato rebaja esa cifra a "menos de cinco asistentes"— a unas 60 que acuden a las tres misas diarias de Derecho.

La Complutense ha rechazado peticiones de la comunidad islámica para que les habiliten sus propios oratorios. "Ahora no estamos para esto", cuenta el rector. Carrillo desearía que la negociación del convenio y el futuro de las capillas se aplazara hasta después de las próximas elecciones a rector, previstas el año que viene, "para que este asunto no centre el debate universitario". La polémica saltó precisamente de forma virulenta en 2011 poco antes de los últimos comicios a los que se presentó el exrector Carlos Berzosa. Un grupo de alumnas irrumpió entonces en la capilla de Psicología, se desnudaron y se besaron en una *performance* de protesta tras la que hubo detenidos.

Ahora el escenario es distinto. El decanato de Geografía e Historia notificó en junio que cerraría la capilla a partir del 15 de julio para su traslado, en virtud de un acuerdo de la Junta de Facultad que se firmó en 2010 y por "problemas de espacio" para albergar actividades docentes. Distintas plataformas conservadoras (como Hazteoir.org) han recogido más de 24.000 firmas de rechazo por internet. Ayer las presentaron en el rectorado y al decano, Luis Enrique Otero. Desde el lunes se convocan misas diarias en el vestíbulo de la facultad.

Ayer a medio día, varios centenares de fieles de distintas edades seguían la ceremonia en presencia de media docena de sacerdotes, que ofrecían también la opción de confesarse en uno de los pasillos. En uno de los carteles se leía una frase del papa Francisco: "La persecución contra los cristianos es hoy más fuerte que en los primeros siglos". El rector defiende que esta decisión no atenta contra la libertad religiosa, ya que hay parroquias externas a menos de un kilómetro. Hoy hay prevista otra misa. El decanato permitirá cualquier forma de reivindicación "mientras no incluya actos vandálicos ni se obstaculice el trabajo de la facultad", explica Luis Enrique Otero. La facultad prevé terminar las obras para convertir la capilla en un aula antes del curso que viene.

MARÍA FERNÁNDEZ Estudiante de Arqueología

"El templo da un servicio más, como la cafetería o reprografía"

P. A., Madrid

María Fernández, de 21 años, estudiante de 4º de Arqueología, era una de las asiduas a la capilla de la Complutense que ayer quedó clausurada para su traslado a otra aula de la Facultad de Geografía e Historia. "El templo da un servicio más a los alumnos, profesores y al personal, como la cafetería o la reprografía", defiende. "Es como si me dijeran 'vete a la cafetería de Caminos'. A veces

sí lo hago, pero prefiero comer aquí, porque pierdo menos el tiempo", añade la estudiante, que la noche del lunes al martes durmió a las puertas de la facultad en una acampada de protesta. "Estoy en contra del traslado porque el aula que nos proponen a cambio es vergonzosa, tanto para dar clase como para capilla. Di un curso de Fenicio ahí y fue insostenible. No hay ventilación".

Esta universitaria no comparte el argumento de que en la uni-

versidad falte espacio. El decanato, que ha ofrecido una nueva aula más amplia y con ventanas para la capilla, defiende desde 2010 que les falta espacio. La previsión es reconvertir la capilla y ganar también sitio para ampliar el museo de Historia de América situado al lado. El problema de espacio, según Fernández, "se arreglaría con horarios racionales". Asegura que "se pierde mucho tiempo en grupos pequeños que desesperan a los profesores y lue-



La estudiante María Fernández.

go deja días enteros en blanco". Se siente molesta por que les relacionen con algún partido. "Yo no soy de derechas y no me gusta que la gente nos identifique con los de derechas; somos de izquierdas, de derechas, nacionalistas, pacifistas..."

La idea de que abran centros ecuménicos (compartidos por distintas religiones) tampoco le convence. "El decano no ha planteado esa opción. A mí me parecería bien que cada credo tuviera su espacio si hubiera, por ejemplo, suficientes alumnos musulmanes", dice. Pero compartir el espacio no le parece viable porque "el concepto de iglesia no existe ni en judaísmo ni en el islam, que los conciben como espacios de reunión, no como lugares sagrados".

El proyecto de grados de tres años complica la ordenación universitaria

Los rectores piden que se frene su implantación hasta que se asiente ‘Bolonia’

P. Á., Madrid

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) —que integran todos los campus públicos y privados del país—, pide tiempo, evaluación y calma antes de incluir un nuevo cambio en la estructura de sus planes de estudio. Consideran que añadir los grados universitarios de tres años, que el Ministerio de Educación estudia introducir en los campus que los pidan voluntariamente, puede resultar “muy confuso” en este momento y reclaman que se aplase *sine die* su aplicación en una comunidad universitaria “saturada de cambios normativos”. Argumentan que conviviría con otras dos estructuras (las viejas licenciaturas de cinco años y los actuales grados de cuatro) que harían el sistema “inestable”, que requiere cambios normativos importantes y alertan de que puede afectar a las plantillas de profesores e incrementar las tasas que pagan los estudiantes.

Estas son algunas de las conclusiones del informe que la CRUE ha remitido al Ministerio de Educación, al que ha tenido acceso este periódico. La conferencia de rectores encargó en abril un estudio sobre la implantación de grados de tres años con máster de otros dos —el sistema actual español supone cuatro años de grado y un quinto para el máster— a la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas (Casue).

El documento cerrado llega días antes de que se celebre el próximo Consejo de Universidades, la reunión en la que participan representantes del ministerio y de todos los rectorados de España. Está prevista el 23 de



Pintada contra el plan Bolonia en la Universidad Complutense de Madrid. / CARLOS ROSILLO

julio. A falta de que Educación cierre el orden del día, el encuentro versará previsiblemente sobre los grados de tres años, una vieja reivindicación asumida principalmente por las universidades catalanas.

Los campus catalanes reclamaron al inicio del llamado proceso de Bolonia (el Espacio Europeo de Educación Superior, que arrancó en 2007), defendiendo que la mayoría de las universidades europeas ofrecen esta fórmula. El informe de Casue subraya ahora que la duración de los estudios de grado “no es en absoluto

homogénea” entre los distintos campus europeos. Añade que la fórmula de tres años está en revisión en otros lugares y que Estados Unidos, América Latina o Asia ofrecen grados iguales a los españoles, con una duración mayoritaria de 240 créditos (cuatro años a una media de 60 créditos por curso).

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció el 24 de junio que su departamento estudia que, de forma “optativa” y “selectiva”, las universidades puedan ofertar grados de tres años. “Para muchos, la fórmula

elegida por España supone un freno para la internacionalización de las universidades considerable”, señaló Wert.

El ministerio no prevé implantarlo en ningún caso para el curso que viene, que empieza en apenas dos meses. Según el titular de Educación “apenas” concluida la adaptación a Bolonia —hay titulaciones en las que aún no han terminado las primeras promociones de graduados, como también señala el informe de los rectores— abordar un cambio “radical y obligatorio” en la duración de grados y más

teres “podría acarrear más problemas que soluciones”.

Los rectores añaden ahora que, aún como fórmula optativa, incluir una tercera estructura de planes de estudio acarrearía nuevas complicaciones que hay que estudiar con detenimiento. “¿Cómo argumentamos que un estudiante de grado de tres años tiene la misma formación básica que uno de cuatro?”, señalan.

El informe reclama más tiempo para poder estudiar cómo es la inserción laboral de los estudiantes de grado y recuerda que “prácticamente todas” las universidades españolas están inmersas en un proceso de acreditación de los grados que servirá

Educación plantea este cambio de modo optativo para las facultades

Los campus alertan de que los estudiantes tendrán que pagar más

precisamente para evaluar la implantación de los nuevos títulos. Respecto a las tasas académicas, el cambio supondría “un encarecimiento de los costes para el estudiante” mientras no existe “un buen programa de becas suficientemente dotado”. Los másteres son significativamente más costosos que los cursos de grado, que ya dispararon sus precios tras el cambio de criterios aprobado por Educación en 2012. Respecto a los docentes, esgrimen que los grados son “generalistas” y permiten una asignación más flexible de los profesores mientras los másteres requieren más especialización, lo que podría “generar o acentuar los desequilibrios entre las áreas”. Un sistema educativo, añaden “necesita de tiempo de aplicación, tiempo de reposo y reflexión” para sacar conclusiones.

La UE rechaza el plan francés para abaratar los fármacos de la hepatitis C

L. A. / J. P., Bruselas / Valencia

Bruselas rechazó ayer la iniciativa francesa de crear una plataforma europea específica para combatir el elevado precio del medicamento más avanzado para combatir la hepatitis C. Tanto los países miembros como la Comisión Europea aseguran compartir la preocupación francesa, pero consideran que ya existen otros instrumentos en el seno comunitario para coordinar esta batalla contra la carestía del producto. Los Veintiocho volverán a examinar la cuestión a finales de octubre.

Francia lleva semanas instando a sus socios comunitarios a que unan fuerzas para rebajar el elevado precio del fármaco Sovaldi, un medicamento de última ge-

neración que se ha mostrado eficaz contra la enfermedad pero que cuesta 60.000 euros por paciente. Los secretarios generales de los diferentes ministerios de Sanidad escucharon ayer en Bruselas el llamamiento francés a crear una red de intercambio de información con capacidad para hablar de precios y negociar con la industria farmacéutica. Tras debatirlo durante 20 minutos, rehusaron crear un mecanismo específico para lograrlo.

La hepatitis C, una enfermedad contagiosa que puede derivar en cáncer de hígado o en cirrosis, se ha convertido en un grave problema de salud pública en Europa. Afecta al 0,5% de la población en los países nórdicos y llega hasta el 5% en el sur y el este de Europa. Entre 5 y 10 mi-

llones de europeos están afectados y el sofobuvir, el principio activo que se comercializa como Sovaldi, podría ayudar a erradicar la enfermedad.

El Ejecutivo comunitario insta a que las propuestas se canalicen a través del grupo que ya existe para gestionar las compras, una iniciativa puesta en marcha hace pocos días para comprar vacunas y otros medicamentos que se consideren prioritarios. Quince países forman parte ya de este grupo (entre ellos España) y otros han mostrado su disposición a hacerlo.

Fuentes comunitarias aseguran que lo decidido hoy no supone dar carpetazo a la iniciativa francesa. La necesidad de rebajar el coste de este medicamento continuará entre las prioridades

sanitarias e Italia, que ahora ejerce la presidencia de turno de la UE, pretende hacer seguimiento de este asunto. El grupo de precios y reembolso de medicamentos, que depende de la Dirección General de Empresa en la Comi-

Los países afirman que ya hay cauces para llevar esa negociación

sión Europea, abordará la cuestión en su próxima reunión del 23 y 24 de octubre.

España mantuvo ayer una posición similar a la del resto de sus socios: no es necesario un

instrumento específico para abaratar ese medicamento, pero, si se crea, España participará. Un portavoz del Ministerio de Sanidad ha señalado que hasta la reunión convocada por la Comisión Europea y la presidencia europea los países no habían tenido ocasión de posicionarse oficialmente ante la propuesta planteada por Francia. “España se ha mostrado de acuerdo en colaborar”, indicó la portavoz.

El ministerio confirma que los responsables europeos de Salud han acordado reabrir la cuestión en el encuentro de octubre, que tratará de determinar una estrategia conjunta “no solo frente al precio del tratamiento de la hepatitis C, sino de otros medicamentos innovadores especialmente caros”, como antirretrovirales o antitumorales. Hasta entonces, el ministerio seguirá negociando con Gilead, el laboratorio estadounidense que comercializa ese tratamiento, para tratar de alcanzar un acuerdo e incorporar el fármaco al Sistema Nacional de Salud.